

## DEMOCRACIAS PARCIALES Y EL INTERROGANTE DE LAS TRANSFORMACIONES INSTITUCIONALES EN LA ÚLTIMA DÉCADA

Mario Sznajder\*  
Luis Roniger\*

### *Resumen*

*El propósito de este artículo es evaluar el proceso paralelo de institucionalización de formas de democracia parcial conjuntamente con la introducción de políticas de libre-mercado en las últimas dos décadas en América Latina. Contestando las preguntas siguientes se evaluará las tendencias de persistencia y cambio en ámbitos con importantes implicaciones para la calidad de la democracia de la región: ¿Existe una nueva cultura política y administrativa inequívoca o las viejas culturas están demostrando ser resistentes? ¿Los nuevos medios de proveer lo que consideraban bienes públicos facilitan la democracia, o la obstaculizan? ¿Cómo se refleja en la opinión pública la relación entre democracias parciales, bienestar público y la nueva cultura político-administrativa? Planteando estas preguntas y buscando respuestas en los actuales procesos de democratización y de introducción de políticas de libre-mercado, el análisis se traslada desde el área de los modelos democráticos al área de la práctica democrática y pone en relieve las tensiones con los modelos democráticos adoptados y compartidos con los principales países de Occidente<sup>1</sup>.*

---

\* Profesor investigador de la Universidad Hebrea de Jerusalén.

1 Esta investigación fue apoyada por la generosa subvención de la BSF Science Foundation (1999-2002) y el Instituto Truman de Investigaciones para el Avance de la Paz, de Jerusalén (2002-3), que reconocemos con gratitud. Queremos asimismo agradecer a los participantes del taller sobre "Limits of Politics, Market Crises and Social Disintegration" efectuado en el Centro de Estudios de América Latina en la Universidad de Cambridge, UK, del 29 al 30 de noviembre de 2002, por sus críticas y observaciones constructivas. Finalmente, reconocemos con gratitud la asistencia de Leandro Kirszenbaum de la Universidad Hebrea de Jerusalén.

### *Abstract*

*The purpose of this essay is to evaluate the parallel process of institutionalisation in ways of partial democracy jointly with the introduction of free-market policies during the last two decades in Latin America. Answering to the following questions, the tendencies of persistence and change in environments with important implications for the quality of the democracy in the region, will be evaluated: ¿Does a new political and administrative culture exist or are the old cultures demonstrating to be resistant? ¿Does the new means of providing what is considered public goods facilitate the democracy, or does they obstruct it? ¿How does the relationship among partial democracies, public well-being and the new political-administrative culture is reflected in the public opinion? Outlining these questions and looking for answers in the current processes of democratisation and of introduction of free-market policies, the analysis moves from democratic models to the area of democratic practice and it emphasis the tensions with the adopted democratic models shared with the main West countries.*

## **EL MALESTAR FRENTE A LA DEMOCRACIA Y LA ECONOMÍA DE MERCADO**

**A** final de los años ochenta y durante los noventa la democracia política y el 'neoliberalismo' económico fueron proclamados en partes importantes de América Latina como los modelos que conducirían a la región hacia la completa integración global con los principales países del sistema internacional, sobre todo los Estados Unidos de Norteamérica.

La democracia fue anunciada como el albor de una nueva era, la cual se diferenciaría de las olas anteriores de democratización por ser el resultado de la presión desde abajo de distintos movimientos sociales y de la sociedad civil, por ejemplo en el ámbito de la lucha contra las violaciones de derechos humanos. Éstos habían tenido una parte instrumental en la desmantelación de los gobiernos dictatoriales y sustitución de fuertes tendencias etatistas.

Muy pronto, sin embargo, se hizo evidente que muchos de esos movimientos sociales y organizaciones no gubernamentales no podrían resistir la pérdida del financiamiento internacional, ocurrida tras el retorno de la democracia. La clase política recuperó el control sobre la esfera pública y pasó a dominar la arena política, a menudo con estrategias y visiones similares a las del pasado. Se hizo evidente que a pesar de la adopción generalizada de la democracia, los sistemas políticos latinoamericanos se diferenciaban de sus homólogos europeos y norteamericanos en su funcionamiento, incluso cuando se

asemejaban a ellos en sus estructuras formales. Esta tercera ola de democratización de la región cristalizó los patrones regionales de la democracia en los cuales destacaron el presidencialismo fuerte, la indiferencia hacia los equilibrios institucionales, una baja confianza institucional, la corrupción, la carencia de mecanismos efectivos de rendición de cuentas a nivel público, el neo-clientelismo y el neopopulismo, así como nuevas formas de violaciones de los derechos humanos, que se mantienen más allá de la adopción del modelo democrático en la región (O'Donnell, 1994; Carretón, 1995; Sznajder, 1996).

Similares malfuncionamientos y desilusiones caracterizaron el cambio hacia las políticas macroeconómicas de ajuste y reestructuración, a menudo llamadas 'neo-liberales'. Estas políticas engendraron nuevas formas de protesta social, de confrontación y un sentimiento de inquietud, mientras contribuyeron a la exclusión, a la profundización de brechas socioeconómicas y a la marginalización, desvirtuando de hecho las expectativas iniciales (Glade, 1996; Costin y Vanolli, 1997; Bitran y Serra, 1998; Vigevani, 1998; Druck da Graca, 1999; Margheritis, 1999; Roniger, 2002). La protesta social, a menudo violenta, ha proliferado así en toda América Latina: citemos entre otros a los piqueteros (grupos que bloquean caminos) en la Argentina, los movimientos indígenas tales como los mapuches en Chile, los mayas en Chiapas y Guatemala y el movimiento Sem Terra en el Brasil. Además, siguen en actividad una serie de grupos revolucionarios, grupos guerrilleros de izquierda y paramilitares de derecha, que se entremezclan ocasionalmente con narcotraficantes, en Colombia y Perú. Las victorias electorales de Luiz Inácio Lula da Silva en el Brasil y Lucio Gutiérrez en el Ecuador, junto con el combatido asimiento en el poder del presidente venezolano Hugo Chávez, son testimonio del apoyo paralelo a la democracia y el malestar de vastos sectores de la ciudadanía con respecto a las visiones neoliberales en la región.

¿Qué falló? ¿Cómo interpretar el desencanto? ¿Acaso se trata de un panorama repetido de incompleta incorporación de los modelos occidentales, del tipo que Laurence Whitehead identifica como el "mausoleo de modernidades" de la América Latina (Whitehead, 2002). ¿Es este un nuevo caso de incorporación de "ideas fuera de lugar", frase que el crítico cultural Roberto Schwarz (1996) acuñó en relación con el Brasil?

Estas sociedades se han considerado parte de Occidente, y por lo tanto sus modelos y contramodelos son principalmente —pero no solamente— occidentales. La concepción desarrollista gradualista, do-

minante en los estudios latinoamericanos ha ido perdiendo validez y apoyo. Muchos de estos estudios buscaron puntos de transición (a la democracia), umbrales de la consolidación y niveles de institucionalización (por ejemplo: la débil o incompleta institucionalización de reformas estructurales). Sugerimos en su lugar, un análisis en términos de las variadas cristalizaciones de un patrón institucional de democracia parcial o limitada, con sus propias lógicas internas, tendencias al desarrollo y contradicciones internas. Por *democracia parcial* nos referimos a un sistema político democrático dominado por tendencias exclusionarias que limitan el alcance y la calidad de la participación social y política, más allá de procesos electorales, y establecen un acceso desigual en las esferas públicas. Dicho sistema político conduce a la aparición de sectores sociales marginales, algunos de los cuales están desconectados del estado y de sus agencias. La democracia parcial ocurre en tándem con varias combinaciones de viejos rasgos modificados y agravados tales como clientelismo, corrupción, ineficaz implementación de la ley, y autoritarismo.

El complejo institucional actual de las políticas de democratización y de mercado libre proporciona un importante punto analítico para observar la disposición de tendencias sociales y políticas, económicas y culturales que se han manifestado en la región desde los años ochenta. Aunque el análisis se podría centrar en el nivel de institucionalización de la democracia y del libre mercado, lo analizamos en términos de las *formas* y los *resultados* de la institucionalización de una democracia parcial, conjuntamente con aperturas del mercado en la región, prestando atención en particular a la cultura política y administrativa dominante y a las reformas en la estructuración de los bienes públicos<sup>2</sup>.

## UNA NUEVA CULTURA POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA?

Luego de sus experiencias con gobiernos militares, represión, guerras civiles y movimientos guerrilleros, la mayoría de las sociedades latinoamericanas parecían preparadas para adoptar nuevos discursos de fortalecimiento de la sociedad civil y de respeto a los derechos humanos. Asimismo y de maneras diversas, se hicieron partícipes del clima internacional dominante que favorecía los principios del mercado libre y la retirada del estado de muchas áreas de actuación económica

---

2 Seleccionamos estos ámbitos por propósitos analíticos, ya que reflejan ejes importantes en la formación y transformación de las democracias parciales latinoamericanas. Otros focos de análisis podrían incluir temas tales como el significado político y el impacto de los medios de comunicación en los nuevos complejos institucionales o la cambiante relación entre religión y política, reformulada con el aumento de los grupos evangélicos en la región.

y social (Stallings y Peres, 2000). Más allá del cambio aparente, cabe preguntarse si dichas tendencias indican un rechazo a la antigua cultura política y administrativa que dirigieron las élites tradicionales o bien si las viejas tendencias se han proyectado y recreado en medio de las actuales transformaciones y a través de qué agentes institucionales.

La investigación realizada sobre las democracias occidentales ha identificado la formación de una nueva cultura política y administrativa, que cobra relieve a nivel local y regional. Seymour Martin Lipset, Terry N. Clark, Ronald Inglehart y Vincent Hoffman-Martinot, entre otros, se han referido al debilitamiento de la política de clases, la pérdida del fervor ideológico y la aparición de orientaciones públicas basadas en política temática o "issue politics", en la idoneidad y el compromiso público de los funcionarios y finalmente en la austeridad fiscal (véase entre otros Clark y Lipset, 1991; Clark, Lipset y Rempel, 1993; Clark e Inglehart, 1998). Los especialistas en América Latina, v.gr. Guillermo O'Donnell (1998, 2000), Carlos Nino (1992) y Scott Mainwaring (1997), han hecho hincapié en la problemática incorporación de estas visiones en América Latina. ¿Cuál es la dinámica que de hecho se dio?

Consideramos que las sociedades latinoamericanas han adoptado los discursos occidentales del fortalecimiento de la sociedad civil y de los derechos humanos en un grado mucho mayor que en décadas anteriores. Siendo resultado de la experiencia de la polarización política, del régimen militar, de la democratización, de las aperturas del mercado y de los cambios en los mercados de trabajo, las antiguas visiones de un cambio revolucionario se han visto marginalizadas, a pesar de que no han desaparecido totalmente. Los nuevos movimientos sociales revolucionan la política, pero no a través de las armas, sino al establecer arenas discursivas alternativas, al desafiar prácticas dominantes y al lograr cierta medida de poder simbólico. Han emergido así nuevos grupos de ciudadanos seriamente comprometidos con el ideal de los derechos cívicos y políticos.

Esto en sí mismo no elimina el uso de la mediación política y el clientelismo, pero sí contribuye a cambiar el discurso a través del cual se expresan las relaciones políticas y personales, así como las tácticas empleadas por quienes utilizan las redes de clientela y amiguismo en el nuevo contorno (vea por ejemplo los trabajos de Gay, 1998 y Martz, 1997). En muchos casos, el clientelismo parece cambiar de forma, convirtiéndose en un mecanismo neo-clientelista de representación de intereses, que se adapta al *modus operandi* de la democracia y se inserta en los enclaves donde fracasa el libre-mercado. Según Gay, en Brasil las redes clientelistas funcionan cada vez más como:

“medios de buscar la provisión de bienes colectivos en contraposición con los bienes individuales. Esto significa que las clientelas políticas tienen menos probabilidad de tomar la forma de agrupaciones desconectadas y de arreglos independientemente negociados y [tienden a incluir a] organizaciones, comunidades o aún regiones enteras que forman relaciones o entendimientos con los políticos, los funcionarios y las administraciones públicas. Es decir, el clientelismo contemporáneo exhibe tanto elementos jerárquicos y relacionales así como también elementos de organización y de identidad colectiva” (Gay, 1998: 14).

Semejantemente, la adopción de los nuevos discursos de derechos humanos sobre la base de la condena de su violación anterior, no impidió que nuevas formas de violaciones proliferaran en democracia o que aumentaran las demandas populares para que las fuerzas de seguridad y el sistema judicial empleen una política de mano dura, que recrudezca el tratamiento dado a criminales y que se dicten veredictos más severos para los elementos sociales peligrosos (Roniger y Sznajder, 1999).

El marco de la democratización y el cambio en la economía abrieron el camino para nuevos discursos y enfoques frente a las instituciones. Sin embargo, estos discursos no generaron un cambio unidireccional y generalizado en los estilos políticos y administrativos. En algunos casos, élites reactivas procuraron resistir los cambios y se encontraron avasalladas por las subsecuentes crisis, que llevaron a la pérdida de su dominio político e influencia. En otros casos, élites proactivas lograron hábilmente transformarse en agentes modernizadores, llevando a cabo reformas administrativas y políticas, sin desechar por completo la política tradicional organizada sobre una base clientelista.

Queremos sugerir que para medir el alcance del cambio efectuado en la cultura política y administrativa, se debe examinar el papel crucial desempeñado por los agentes locales y regionales (vea por ejemplo Remmer y Wibbles, 2000). Dichas élites han mediado el impacto de los procesos globales y nacionales hacia una mayor democratización y liberalización económica. Analizando cómo las constelaciones locales de poder afectan a la dirección y el impacto del cambio, se puede llegar a esbozar un argumento diferenciado de cómo las tendencias globales y nacionales articulan con las sociedades regionales y locales. Es en el ámbito local y regional que la población actúa, interpreta y da un significado concreto a los procesos de retracción, descentralización y democratización del estado. Centrar el análisis en este aspecto es necesario no sólo a fin lograr una visión “densa” del proceso de transformación, sino también pues, en cierto sentido, los acontecimientos en las periferias condicionan las políticas estructuradas a partir del

gobierno central<sup>3</sup>. Los entornos colombianos, argentinos y hasta hace poco tiempo peruanos son quizás los más distintivos y extremos casos de desarticulación regional, pero en cierto grado, dichas dinámicas regionales están presentes de una manera u otra en la mayoría de los países latinoamericanos.

Las políticas de democratización y de apertura de mercados incluían posibilidades implícitas de autonomización regional, descentralización y de desarrollo de iniciativas empresariales. En un estudio que conducimos en 2001-2 comparando la situación en la provincia de Corrientes (Argentina) y el estado de Ceará (Brasil), las complejas y cambiantes relaciones entre los diversos niveles políticos y administrativos en estos extensos países federales, se revelaron cruciales cuando las reformas económicas y la democratización en los años ochenta y noventa desafiaron patrones existentes de articulación política

En Corrientes, las constelaciones del poder local administraron la transferencia de los presupuestos del gobierno federal al provincial, asegurando así la estabilidad a corto plazo de la vieja élite, que podía de tal modo controlar el empleo público de bajo ingreso. Sin embargo, a largo plazo, la estrategia falló. Las oportunidades proporcionadas por la democratización y la reforma económica no alcanzaron la escena local hasta después de que el gobierno federal fue forzado a retirar su tradicional apoyo presupuestario a la provincia.

Este modelo, que denominamos *estático*, no solamente bloqueó la transformación de la economía y la política sino que también cercenó la capacidad de varios grupos sociales de organizarse como parte proactiva de la sociedad civil y de articular políticamente sus demandas. En el momento en que los disturbios y el malestar social se agudizaron a nivel provincial, en víspera de la profunda crisis económica, la única alternativa factible fue recurrir nuevamente —por enésima vez— a la intervención federal de la provincia.

En los años ochenta y noventa, las élites de Ceará mostraban una estructura fracturada que aparentemente indicaba mayor vulnerabilidad que en Corrientes. Al mismo tiempo, empero, tal estructura fracturada había generado un impulso competitivo e innovador en el seno de la sociedad cearense. Las élites de la región desarrollaron una estrategia

---

3 Bajo el concepto de periferias incluimos periferias provinciales y áreas circundantes a los mayores centros urbanos, donde las dinámicas de los cinturones de pobreza se diferencian con aquellos del centro. Además, las áreas provinciales poseen sus propias periferias, aún más retrasadas.

proactiva de ganar y mantener el poder por intermedio de la modernización. Una estructura política más acorde con los discursos de austeridad fiscal y fortalecimiento de la sociedad civil emergió, sin suprimir totalmente la intermediación clientelista.

A corto plazo, esto generó un gran antagonismo y oposición por parte de los sectores sociales acostumbrados a beneficiarse del uso selectivo de los dineros públicos provenientes del suministro de servicios sociales y del empleo público controlado por redes clientelistas. Sin embargo, a largo plazo, el temprano cambio hacia una nueva conexión entre la política y la economía resultó ser positivo, generando participación pública y confianza en vastos sectores de la población. Todo esto ocurrió sobre el trasfondo de la nueva constitución brasilera de 1988, que alentaba la participación y la descentralización. Se creó una imagen progresiva del estado de Ceará y sus élites a nivel nacional. Ceará fue considerado como un 'modelo' para Brasil en su conjunto, cosa que el entonces presidente Fernando Enrique Cardoso y su esposa Ruth Cardoso, en entrevista del 20 de septiembre de 2000, no dejaron de destacar, apoyando así los proyectos de desarrollo de la sociedad civil en el ámbito popular.

El reconocimiento del gobierno federal y la imagen pública positiva de Ceará, fueron utilizados por quienes detentaban el poder, en el ámbito regional, para atraer capital e inversiones, creando de esta manera empleo industrial y recursos para el desarrollo social del estado. En la segunda mitad de los años noventa más de 600 empresas industriales, extranjeras y brasileñas, establecieron plantas en Ceará, invirtiendo más de US\$6 billones. Esto produjo 130.000 nuevos lugares de trabajo en la industria y contribuyó indirectamente a otro millón. Mientras que en 1986 el ingreso promedio per cápita era solamente de un 33 por ciento del promedio brasileño, hacia el 2000 ascendió hasta constituir el 59,1 por ciento del promedio nacional, manteniéndose en \$2.813 por año (Perfil económico, 2002).

A largo plazo ese modelo de interacción entre la economía y la política, que podemos denominar *dinámico*, permitió una transformación de la sociedad cearense, la que tradicionalmente sufría bajo la enorme carga de la pobreza, el analfabetismo, la falta de capital, el duro clima y las pobres condiciones agrícolas. Mientras este proceso avanzaba y creaba nuevas formas de participación y de confianza pública, las pobres comunidades locales en los márgenes de las periferias de Ceará comenzaron a añadir contribuciones a los dineros distribuidos por ley desde el nivel federal al nivel local. Esto fue importante para el proceso

paralelo de instalación parcial de los modelos de libre-mercado y de la búsqueda de la iniciativa local y de nuevas empresas económicas. En términos del crecimiento relativo en su PBI, Ceará evolucionó por sobre el promedio nacional, y la estructura económica del estado se modernizó. Entre 1990 y 1996 el PBI de Ceará creció asombrosamente un 33,40 por ciento, casi el doble del incremento nacional del 17,85 por ciento. A final de los años 90, más del 45 por ciento de la PEA estaba empleado en el sector de servicios, casi el 40 por ciento en el sector industrial y solamente un 14 por ciento en la agricultura y cría de ganado. A pesar de las agudas desigualdades en la estructura interna de los ingresos y en la cobertura de la educación y de la salud, los indicadores demostraron un proceso de mejora general en la calidad de la vida. Por ejemplo, en el año 2000, Ceará exhibió un crecimiento anual del 4,55% en su PBI y exportó U\$495 millones, representando un aumento del 33,38 por ciento con respecto a las cifras de 1999 (Perfil económico, 2002). A pesar de que la existencia de gran parte de los servicios públicos dependía del subsidio del gobierno, las transferencias fueron hechas según las normas, en forma transparente y aumentaron mientras que la sociedad civil local participaba eficazmente en la administración y la supervisión de los servicios públicos.

Como consecuencia, algunos políticos del estado de Ceará —sobre todo *Ciro Gomes* y *Tasso Jereissati*— se proyectaron como políticos importantes en el ámbito nacional, llegando el primero a ser candidato presidencial en las elecciones del 2002. El destino de la élite política conservadora reactiva de *Corrientes* fue llamativamente diferente. Como resultado de la mala administración, la corrupción y el “amiguismo”, la región sufrió una serie de crisis económicas y políticas. Cuando la situación económica se deterioró hacia el final de los años noventa, el gobierno no pudo pagar los sueldos, provocando que centenares de personas se sumaran a marchas, manifestaciones, sentadas y bloqueos de rutas. Choques violentos ocurrieron entre los partidarios y los opositores del hombre fuerte local, *Raúl “Tato” Romero Feris*, líder del partido de PANU<sup>4</sup>, gobernador de *Corrientes* entre 1993 y 1997 y el alcalde de la capital provincial entre 1997 y 1999. Una serie de ataques violentos, incluyendo cartas bomba, fue lanzada contra políticos, jueces y fiscales locales, y atentados fueron llevados a cabo contra oficinas y vehículos entre redes políticas rivales.

La escasez de bienes de consumo, el cierre de las escuelas y los servicios sociales, las huelgas de la policía y de empleados públicos y las

---

4 PANU significa Partido Nuevo el cual se dividió del Partido Autonomista Liberal en 1996.

fuertes bajas en la actividad comercial eran otras señales de la anarquía próxima a llegar. Hacia diciembre de 1999, tres gobernadores intentaron estabilizar la provincia con la ayuda de coaliciones contendientes, sólo logrando elevar el nivel de fractura política y faccionalismo. La situación alcanzó proporciones caóticas cuando el puente que une Corrientes con la ciudad vecina Resistencia (provincia del Chaco) —el camino vital y de entrada para el comercio con el Mercado Común de América del Sur, MERCOSUR— fue bloqueado. Cuando las tropas federales ‘abrieron’ el puente por la fuerza, dos personas resultaron muertas y docenas de manifestantes fueron heridos y arrestados (Helfgot 1999a, 1999b). Una nueva intervención federal se llevó a cabo en la provincia, con varios representantes de la provincia más próspera y estable de Córdoba substituyendo a la ineficiente administración anterior. La intervención fue asignada con la tarea de crear un diseño institucional menos corrupto y más transparente, y restituir las finanzas de la provincia, preparándola para nuevas elecciones. Dicha intervención era la decimoséptima medida de emergencia, que le dio a Corrientes el dudoso honor de ser la provincia Argentina que tenía el número más alto de intervenciones federales desde la independencia. Romero Feris fue enviado a la cárcel acusado de corrupción. (Entrevista con Anselmo Bruno, interventor de la Municipalidad de Corrientes y el Dr. Oscar Raúl Aguad, interventor de la provincia de Corrientes, realizadas el 19 y el 20 de Septiembre de 2001, respectivamente).

Una conclusión apresurada sería adjudicar la entera culpa del fracaso de Corrientes al clientelismo. En efecto, el trasfondo de escasez combinado con brechas socioeconómicas, pueden promover el clientelismo, especialmente en las regiones donde, tradicionalmente, los individuos desarrollan frecuentemente conexiones personales y agrupaciones informales. Además, el clientelismo se exagera en una situación de confianza institucional baja y de fiabilidad pública institucional, como ha sido característico de la política elitista brasileña y de la desprestigiada y ocasionalmente aparentemente anárquica política argentina. En muchas instancias, el clientelismo funcionó como un refuerzo en la búsqueda de dividendos a través del control de funciones económicas de origen estatal) y una estrategia para ‘colonizar’ funciones el gobierno, en una especie de estrategia de búsqueda de renta (*rent-seeking*). Sin embargo, el clientelismo no puede ser culpado enteramente por la falta de la incentivo reformista por parte de algunas élites regionales. En otras instancias, el clientelismo se ha usado en forma dinámica, desempeñando también un rol importante en entablar redes personales y de intercambio en el ámbito local, provincial y federal en casos como el de Ceará así como en algunos casos en Ecuador, Chile,

Venezuela y otros países centroamericanos<sup>5</sup>. De esta manera presencia- mos la generación de nuevos estilos clientelistas o neo-clientelistas, que actúan como un puente entre el viejo enfoque político autoritario y los nuevos estilos de democracia y la actividad en el marco de los mercados abiertos.

En forma paralela, se registran intentos de contener el clientelismo y la corrupción. Prácticas como la del contralor electoral en México, las oficinas de anticorrupción en Argentina y Brasil, la experiencia de convivencia ciudadana y juntas de acción comunal de Bogotá y, en otro plano, el modelo de presupuesto participativo en diversos lugares de Brasil —son ejemplos de variados intentos que se realizan en América Latina, desde “arriba” y desde “abajo” para lograr institucionalizar las prácticas participativas y crear un espíritu de transparencia en la administración pública.

El desarrollo de dichas iniciativas frente al relativo fracaso de experiencias similares en el pasado apunta a que la ampliación de la combinación entre participación y transparencia podría proveer una alternativa eficiente a las democracias parciales. Estos canales de movilización ciudadana no perjudicarían o amenazarían a la democracia, sino que podrían ampliarla y fortalecerla. El afianzamiento de los desarrollos de esta naturaleza captaría el potencial democrático que poseen amplias capas sociales y a la vez afianzarían la legitimidad del sistema, al constituirse en un puente entre las antiguas élites o clases políticas y los nuevos participantes activos en la esfera pública. Esto implicaría que la democracia no sería sólo un sistema adoptado por ser el “menos malo entre todos”, sino que se podría transformar en una opción positiva al abrir la esfera pública a la participación ciudadana y espacios públicos deliberativos y al garantizar posibilidades de movilidad social, política y cultural. En sociedades en las que la distribución de ingresos crea sistemas duales y predominio de sistemas jerárquicos, la introducción de sistemas participativos “desde abajo” se constituirían en mecanismos deflectores de violencia, creando mayores posibilidades de convivencia y mejorando la gestión pública (Mockus y Corzo, 2003).

Las reformas constitucionales generalizadas en la región en la década del ochenta y del noventa han reconocido la importancia de la

---

5 En trabajos recientes, los investigadores difieren en su evaluación de la viabilidad e importancia institucional del clientelismo en la modernización tardía. Para una discusión general véase Roniger 2001 y Roniger 2004. Sobre Ecuador véase Salman 2000. Y sobre Colombia: Leal Buitrago *et al.*, 1991, Martz 1997 y Escobar 2000.

sociedad civil y han codificado la necesidad de apertura de las esferas públicas a un pluralismo que otrora había sido subsumido en la lógica de la homogeneización del estado-nación<sup>6</sup>. Sin embargo, uno de los puntos clave sigue siendo no sólo el fortalecimiento legal-constitucional de diversos sectores a través de la concesión formal de derechos, sino de su traducción a la práctica participativa y a la generación de una nueva cultura política y administrativa.

La creación de una nueva cultura política y administrativa no es un fenómeno generalizado. Los estándares de transparencia y de la responsabilidad e idoneidad necesarias para la modernización, que se han promovido en casos como el de Bogotá, no han tenido éxito en muchos otros casos. Se han creado nuevas formas de clientelismo adaptadas a las nuevas modalidades económicas y políticas. Fuera de esto, siguen existiendo fuertes presiones populistas desde abajo, impulsadas por los declinantes estándares de vida y que hacen uso de los mismos discursos reivindicativos de derechos ciudadanos, de participación política y de fortalecimiento de la sociedad civil.

## BIENES PÚBLICOS: TENDENCIAS DE INCLUSIÓN Y DE EXCLUSIÓN

La segunda área de análisis se refiere a los nuevos medios de proveer los 'bienes públicos'. A pesar de que agentes prácticos y analistas teóricos han estudiado el impacto de las políticas macroeconómicas, la privatización y la retracción del estado de la economía, lo que no se ha discutido de manera suficiente es si dichas políticas facilitan la democracia o la obstaculizan. Semejantemente, existen numerosos estudios sobre cambios en las condiciones laborales y la flexibilidad laboral, pero el punto de vista que tratamos aquí, analiza de qué manera estos cambios afectan no solamente la esfera pública, sino que también a la participación política y la sociedad civil.

---

6 No todas las constituciones han favorecido la ampliación democrática. Tenemos la carta fundamental aprobada en Chile en 1980, que sirvió de base a una democracia limitada y que fue parcialmente reformada tras la democratización. Nuevas constituciones fueron aprobadas en Honduras (1982), El Salvador (1983), Guatemala (1985 y reforma fracasada en 1999), Nicaragua (1985 y reformada en 1995), Haití (1987), Brasil (1988 y reformada en los noventa), Colombia (1991), Paraguay (1992), Perú (1993), República Dominicana (1994 y 2002), Uruguay (1997) y Venezuela (1999). Ecuador adoptó una nueva Constitución en 1998, tras haber reformado su Constitución de 1979 en 1984 y 1996. Argentina reformó su Constitución de 1853 en 1994. La Constitución mexicana de 1917 fue muy levemente reformada en 2002. Panamá introdujo reformas a su Constitución de 1972 en 1978, 1983 y 1994. Cuba reformó su Constitución de 1976 en 1992 y 2002, pero sigue bajo un régimen unipartidista (Barczak 2001, Sznajder 2002; *Constitution of the America*

A lo largo de América Latina, las décadas pasadas han sido testimonio de un equilibrio cambiante entre los estados y los mercados, siguiendo la transformación del discurso hegemónico. Mientras que en períodos anteriores el estado fue concebido como central para el desarrollo económico y la democracia redistributiva, desde los mediados de los años setenta en Chile, y más adelante en otros países, la visión que prevalecía era aquella que favorecía la privatización y la retracción del estado de la economía. Chile fue el primer país que en América Latina experimentó un profundo cambio que lo condujo de un modelo económico de intervención estatal en la economía a uno de mercados libres y reducción en los roles económicos del estado, adoptando prácticas neoliberales desde 1975, mucho antes de Thatcher en el Reino Unido y Reagan en los Estados Unidos. Una serie de privatizaciones fue llevada a cabo, a pesar de que el Estado conservó el control sobre las empresas más importantes, la corporación del cobre, CODELCO. El control del Estado sobre la economía no era percibido ya como parte de la solución frente al subdesarrollo, sino que pasó a ser considerado como parte del problema. En líneas acordes con el así llamado Consenso de Washington, los expertos locales recurrieron a las internacionalmente aconsejadas privatizaciones, por lo menos en aquellas áreas en las cuales la iniciativa privada se consideraba como capaz de tomar las funciones económicas realizadas previamente por el Estado.

La idea del mercado como entidad autorreguladora se difundió extensamente. En la práctica, los estados mantienen todavía su influencia en los mercados por intermedio de las políticas fiscales, tipos de cambio y de interés, funciones reguladoras, protección de la propiedad y la formulación de marcos jurídicos. De todos modos, mientras que en la práctica los estados preservan tal funcionalidad, prevalece la idea del estado que debe contraerse y seguir un modelo de austeridad fiscal.

Estas ideas se ligan a la primacía de la economía y la cultura del consumo, que se convirtió en un ideal y una práctica social central junto con una seudomasificación de los estilos de vida. A menudo, la entronización del consumismo está desconectada de cuestiones urgentes para sectores populares enteros —los así llamados estratos 1, 2 y 3 de la población— como la equidad, la pobreza y acceso diferencial al consumo, sin mencionar ‘viejas’ cuestiones tales como el acceso ciudadano e influencia en la toma de decisiones y en la formación de política social y económica (Hopenhayn 1993; Hopenhayn, Calderón y Ottone, 1997).

Siguen existiendo diferencias entre la retórica del nuevo modelo económico y las prácticas y resultados. Aún así, el cambio de perspec-

tiva afectó el papel tradicional del Estado interventor en la región. Una de las áreas más afectadas fue la regulación de mercados y servicios.

La necesidad básica de atraer inversiones y flujos de capital, no solamente para la privatización directa, sino también para asegurar la estabilidad y el crecimiento macroeconómico, en muchos casos creó numerosas limitaciones a la capacidad reguladora del Estado. En otros casos, notablemente en la Argentina, la corrupción fue condicionando el proceso de privatización, aumentando aún más las ventajas de los mercados desregulados para los inversionistas. Esto afectó la calidad de los servicios públicos, especialmente en el ámbito de lo que hasta hace pocos años atrás eran considerados como bienes públicos.

Allí donde la regulación fue dejada de lado mientras que los servicios eran privatizados, el sistema no pudo asegurar la disponibilidad de canales institucionales de apelación disponible a los consumidores en casos de malfuncionamientos en la operación de dichos servicios. Muchos contratos fueron estructurados sin estipular la subsiguiente inversión de capitales privados para la renovación periódica de la infraestructura. A menudo, las privatizaciones no eliminaron formas cuasimonopolistas de provisión de servicios, particularmente en los casos de los monopolios naturales como por ejemplo en la provisión de aguas, la administración de desagües y cloacas. Por consiguiente, en muchos casos, los problemas de la regulación de precios y el control de calidad fueron agravados, no llegando siquiera a tratar el tema del acceso universal a los servicios en sociedades con brechas socioeconómicas crecientes. La concesión de licencias a largo plazo como parte de los contratos iniciales de privatización impidió llevar a cabo reducciones de precios en tiempos de crisis. Aunque desde un punto de vista teórico, este tema podría ser solucionado por intermedio de la recolección de impuestos y políticas subsecuentes de redistribución, en efecto, la magnitud de la evasión fiscal en países tales como Argentina y Brasil imposibilitaron poner tales aspectos del modelo en práctica (Bergman, 2002; Roniger, 2002).

Los cambiantes precios de los servicios públicos y los cambios hacia condiciones contractuales comerciales, sin la intervención de criterios políticos y sociales, afectaron a todos los estratos sociales. Además, la reestructuración de las compañías fue traducida en el despido de empleados públicos, en altos niveles de desempleo y de empleo parcial, en la terciarización del empleo y en la falta de la seguridad laboral. Se afectó asimismo la capacidad de negociación de salarios y condiciones laborales por parte de aquellos trabajadores que aún se mantuvieron en

condiciones de dependencia laboral. Ello también condujo a la disminución del poder de los sindicatos tradicionales.

Estos aspectos se han discutido extensamente en la literatura. Lo que debe ser acentuado es su incidencia en la calidad de la democracia. Como resultado de estos cambios, menos recursos están disponibles, agudizando la dualización de las sociedades latinoamericanas en el plano de la participación civil y política. El empobrecimiento cada vez mayor ha excluido del mercado a un número sin precedentes de grupos socioeconómicos marginales, pero al mismo tiempo ello los ha afectado en el plano de la política y las esferas públicas de estos países.

Hay un *doble* proceso de dualización. En un plano, los grupos socioeconómicos más fuertes y los más débiles funcionan en círculos separados, con acceso diferenciado a los mercados y a los servicios en áreas tan variadas como educación, salud, fondos de pensión y vivienda. Aquellos situados en el segmento medio de la sociedad, no pueden sustentar los servicios a los precios del mercado, pero pueden todavía encontrar varias vías clientelistas y no-clientelistas para su provisión pública. Estos grupos tienden a desarrollar articulaciones sociales y políticas diferenciadas hacia el Estado, extendiéndose desde la actividad partidaria a la protesta. Chile y el Brasil ilustran esta tendencia, habiendo reducido la pobreza absoluta en los años recientes, sin disminuir las enormes brechas socioeconómicas.

El segundo proceso de dualización separa los grupos antedichos, que se relacionan de una manera u otra con el estado, de aquellos individuos y sectores desconectados totalmente de toda articulación macroinstitucional, que viven fuera de la sociedad organizada, más allá de la economía formal y del alcance y control del estado. El impacto de estos sectores ha ido en ascenso en muchas situaciones, a veces de manera violenta y en otras en formas no violentas. Los procesos de marginalización social, económica y política han estado en marcha a varios niveles, en todos los países latinoamericanos. Los años ochenta fueron años de estancamiento con un aumento de la pobreza y la desigualdad. Esta desigualdad persistió en los años noventa. Incluso allí donde la macroestabilidad fue alcanzada y se logró cierta disminución en la proporción de la pobreza, la brecha entre los estratos más pobres y los más ricos creció, como resultado de las políticas que no pudieron correlacionar positivamente el crecimiento con mayor equidad (Chalmers *et al.*, 1997; Kliksberg, 2000). Esta tendencia fue especialmente pronunciada en Argentina, Bolivia, El Salvador y Nicaragua.

Argentina es quizás el caso más dramático, por la desestructuración de las clases medias y la pauperización notable de su población. En el pasado, era el país con los ingresos medios más altos de América Latina. La ineficacia del estado y su repliegue han contribuido a la reducción de las clases medias y fueron responsables de la subida sustancial de los niveles de pobreza y de las brechas socioeconómicas. La crisis generalizada ha llevado a Argentina a compartir índices similares de pobreza y de marginalización social con otros países, de los cuales pretendía disociarse orgullosamente en el pasado.

La crisis generó nuevos experimentos de supervivencia, por ejemplo la proliferación de redes de reciclaje en la metrópoli y la aparición de redes de trueque, construidas sobre el uso de vales en vez de moneda oficial. A pesar de que estas experiencias son innovadoras, no podrían ser consideradas como capaces de sostener a una sociedad civil vital. La red de reciclaje reprodujo la estructura de desigualdad, por la cual aquellos mediadores prominentes acumularon los productos y cosecharon las principales ganancias, con los trabajadores recibiendo las migajas. De manera similar, la pérdida de confianza institucional implicó que, cuando se profundizó la crisis económica a principios de 2002 con la devaluación del peso y la vertiginosa subida en el desempleo, más de 1 millón de personas se unieron a miles de círculos de trueque, intentando llegar a un balance por intermedio de la economía informal.

En el nadir de la crisis, el número de los miembros (llamados *prosumidores*, una combinación de productores y consumidores) aumentó súbitamente. Sin embargo, el sistema perdió el atractivo cuando aparecieron vales falsificados y la inflación se reprodujo dentro de la red del trueque, una nueva prueba de que la pérdida de credibilidad y la falta de respeto por las normas no cesa en el umbral de las instituciones del Estado sino que se proyecta como un factor de desintegración al seno de la sociedad civil.

Es por tal debilidad normativa, unida a la crisis de sectores sociales amplios, que aún donde la proporción de la pobreza ha declinado (medido según un muy bajo indicador de \$2 diarios per cápita), se puede prever que los sectores marginales habrán de seguir generando fuertes presiones, derivando en formas desarticuladas de impacto en la esfera pública así como en nuevas redes populistas y clientelistas.

En este contexto, la violencia social y criminal se convierte en uno de los rasgos distintivos de la democracia parcial o limitada. Así como

persisten brechas socioeconómicas y el estado se desliga de las expectativas de redistribución de ingresos que tradicionalmente expresaba la ciudadanía, amplios sectores se involucran en todo un espectro de actividades informales, no-legales e ilegales. Más allá de la economía informal y la aparentemente no-nociva evasión de impuestos, aumenta el uso y comercio de droga, los disturbios y comportamientos violentos en momentos de crisis prolongada o aguda, y la prostitución femenina, masculina, e infantil.

Los estados se enfrentan a demandas de austeridad presupuestaria y encuentran difícil asegurar la seguridad pública y personal, controlar de forma eficaz su territorio y fronteras, y no pueden satisfacer ni siquiera las mínimas expectativas de la ciudadanía en una democracia, es decir, asegurar un monopolio legal e imparcial sobre el uso de medios de la coerción. El aumento de la violencia en este tipo de sistemas de democracia parcial se convierte en la base de demandas y expectativas generalizadas para la adopción de medidas más duras y autoritarias que, si se llegaran a llevar a cabo, limitan los derechos humanos y las libertades civiles (Roniger y Sznajder 1999, p. 151-152).

El tema de los bienes públicos sigue siendo de crucial interés general y un foco de discusión política en cualquier esfera pública democrática. Por las razones indicadas previamente, algunos de los países latinoamericanos más desarrollados han hecho caso omiso a estos temas cuando adoptaron sus políticas de reestructuración macroeconómica y privatización. Más allá de la implicación obvia de este cambio en los costes implicados de acceso a los bienes y servicios públicos, la ausencia de regulación adecuada ha tenido implicaciones sobre la calidad de vida en áreas tales como infraestructura, comunicación y seguridad personal. El establecimiento combinado del proceso de democratización y de las políticas neoliberales ha agudizado la contradicción entre el interés empresarial y el interés amplio del público en torno a la aplicación de la regulación. Las tendencias exclusivistas de las nuevas políticas económicas y las cambiantes estructuras laborales han restringido la capacidad de sectores amplios de la población de tener una voz y de influenciar en las decisiones políticas que han afectado la calidad de la vida general en la región. Sólo cuando la descentralización de los servicios públicos coincidió con la introducción de mecanismos eficaces de reparto, control y supervisión presupuestarios, como en Brasil a raíz de la reforma constitucional, las tendencias inclusivas llegaron a ser más pronunciadas.

## CONCLUSIÓN

Diversas estimaciones sobre el desempeño económico y del sistema político democrático indican que en la mayoría de los países latinoamericanos en la última década se ha registrado una disminución en la confianza pública. De las encuestas de opinión pública publicadas por Latinobarómetro para el año 2002 surge que a pesar de que la mayoría de los latinoamericanos entrevistados se dicen partidarios de la democracia, prefiriéndola a cualquier otro sistema de gobierno, el nivel de apoyo a la democracia ha disminuido en 13 de los 17 países cubiertos, con cinco naciones mostrando un nivel de apoyo que llega a porcentajes muy bajos, en el rango de 37 a 45 por ciento de partidarios de la democracia. En dicha escala se hallaban Colombia, Brasil, El Salvador, Paraguay y Guatemala. El nivel de apoyo a las soluciones autoritarias ha aumentado en ocho países entre 1996 y 2002. Incluso en los países donde la ciudadanía expresaba su preferencia por la democracia tras largos años de gobiernos autoritarios militares, como los países del Cono Sur, se registró un alza en la demanda de que el gobierno adopte duras medidas contra criminales y marginales. En 11 de los 17 países reseñados, el grado de descontento con el funcionamiento de la democracia traspasó el 50 por ciento en las muestras tomadas entre 1996 y 2002.

Esas cifras indican un profundo deterioro en la confianza pública sistémica, a pesar de su aceptación formal, tal vez resignada. Asombrosos son los casos de Paraguay y Argentina, con más del 90 por ciento de descontento en 2002, y el caso de México, con un 80 por ciento de desencanto con la democracia, ello a pesar de que aquel país había iniciado recientemente un proceso novedoso de transferencia del poder político, después de un prolongado período de gobierno monopartidista y clientelismo orquestado por décadas en torno al PRI y a las organizaciones corporativistas ligadas a ese partido político. En Colombia, Brasil, Chile, Bolivia, Perú y Ecuador el desencanto con la democracia se extendía entre el 60 al 80 por ciento de las muestras. En cuanto a las políticas económicas, la opinión pública tendía a creer en la mayoría de los casos que sus resultados han sido negativos (Latinobarómetro, 2002).

Cuando uno examina los resultados de estas encuestas, uno debe leerlas en base a las altas expectativas generadas por la ola de democratización y reforma económica en los años ochenta y noventa. O sea que constituyen en cierto sentido, un índice de desilusión y desencanto. Además, a pesar de varias tendencias innovadoras en el plano de la

incorporación de los nuevos discursos referidos a la sociedad civil y los derechos humanos y la promulgación de mecanismos de descentralización y participación, la resiliencia de la vieja cultura política y administrativa todavía afecta a los patrones de liberalización de la democracia y de apertura de mercados en la región. El presidencialismo y la indiferencia hacia un sistema de *check-and-balances*, la baja confianza institucional y la corrupción, los enclaves autoritarios, la carencia de responsabilidad pública y el neoclientelismo, siguen siendo y son instrumentos usados por los actores políticos en un marco de crecientes brechas socioeconómicas y de pobreza endémica generalizada.

Estas tendencias y restricciones a la participación ciudadana son combinadas con otros aspectos del sistema político para crear un complejo institucional de democracia parcial o limitada. En este tipo de democracia, amplios sectores son marginados, volviéndose poco dispuestos o incapaces de participar mientras que el acceso a bienes y servicios les es negado. Mientras tanto, otros sectores continúan participando y teniendo acceso a los recursos de manera mediada, a través de las redes clientelistas que se proyectan dentro del sistema político y la administración pública.

El modo de funcionamiento de los mercados y del sistema político ha generado pues un desencanto amplio, una pérdida de confianza institucional y un cinismo generalizado hacia las élites políticas y económicas. Con algunas excepciones notables, la descentralización y la reforma administrativa no han producido una cultura política y administrativa democrática abarcadora. En la mayoría de los casos, la privatización ha causado problemas serios de regulación y un acceso público limitado a bienes. Las reformas constitucionales han tenido resultados variados, según cómo cuán eficazmente han reformulado políticas distributivas y reglas del gobierno orientadas a combinar los principios normativos con los aspectos substantivos de la democracia, al decir de Norberto Bobbio (1987; 1989: 157-158). A pesar de los extendidos límites de la democracia, los años noventa han sido testigos de nuevos experimentos sociales y políticos dirigidos a dar poder a sectores más amplios. La democracia y los modelos de apertura de mercados han sobrevivido las crisis y las fuertes presiones internas, mientras que los procesos de cambio continúan. La dimensión substantiva de la democracia debe ser acentuada en el futuro tanto como los aspectos formales y electorales, que han sido adoptados y consolidados en las décadas recientes.

## BIBLIOGRAFÍA

- ALEXANDER, IAN y A. ESTACHE (1999). "Infrastructure Restructuring and Regulation. Building a Base for Sustainable Growth". World Bank conference paper.
- AVRITZER, LEONARDO (2002). *Democracy and the Public Space in Latin America*. Princeton: Princeton University Press.
- BARCZAK, MONICA (2001). "Representation by Consultation? The rise of Direct Democracy in Latin America". *Latin American Politics and Society*, 43: 3, 37-59.
- BERGMAN, MARCELO (2002). "Who Pays for Social Policy? A Study of Taxes and Trust". *Journal of Social Policy*, 31, 289-305
- BIONDI, ALOYSIO (2000). *O Brasil privatizado. Um balanço do desmonte do Estado* São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 7a. reimpressão
- BITRAN, EDUARDO and PABLO SERRA (1998). "Regulation of Privatized Utilities: The Chilean Experience". En: *World Development*, 26, 6
- BOBBIO, NORBERTO (1987). *The Future of Democracy*. Oxford: Polity Press.
- BOBBIO, NORBERTO (1989). *Democracy and Dictatorship: the Nature and Limits of State Power*. Cambridge: Polity Press.
- Brazil (1998). "The Challenge of Constitutional Reform", special issue of the *Journal of Interamerican Studies and World Affairs*, 40, 4.
- CHALMERS *et al.* (1997). *The New Politics of Inequality in Latin America*. Oxford: Oxford University Press.
- CLARK, TERRY N. y LIPSET, SEYMOUR M. (1991). "Are Social Classes Dying?", en: *International Sociology*, 4, 397-410
- , LIPSET, S.M. y REMPEL, M. (1993). "The Declining Political Significance of Social Class". En: *International Sociology*, 8:3, 293-316.
- , e INGLEHART, RONALD (1998). "The New Political Culture: Changing Dynamics of Support for the Welfare State and Other Policies in Post-Industrial Societies", En: Terry Nichols Clark and Vincent Hoffman-Martinot (eds.). *The New Political Culture* Boulder: Westview, 9-72
- Constitutions of the Americas (2003) [<http://georgetown.edu/pdba>]
- COSTIN, HARRY y VANOLLI, HÉCTOR (eds.) (1997). *Economic Reform in Latin America* (New York: Harcourt Brace).
- DRUCK DA GRAÇA, MARÍA (1999). *Terciarização: (Des)fordizando a fábrica*. Salvador: Editora da Universidade Federal da Bahia.
- ESCOBAR, CRISTINA (2002). "Bullfighting Fiestas, Clientelism and Political Identities in Northern Colombia", in Luis Roniger and Tamar Herzog (eds.) *The*

*Collective and the Public in Latin America*. Brighton: Sussex Academic Press, 174-191

GARRETÓN, MANUEL ANTONIO (1995). *Hacia una nueva era política*. Santiago: Fondo de Cultura Económica.

GAY, ROBERT (1998). "Rethinking Clientelism: Demands, Discourses and Practices in Contemporary Brazil", en: *European Review of Latin American and Caribbean Studies*, 66, 7-24.

GLADE, WILLIAM (1996). *Bigger Economies, Smaller Government. The Role of Privatization in Latin America*. Boulder: Westview.

HELFGOT, MARCELO (1999a). "Dos muertos, 50 heridos y 28 detenidos por la violencia en Corrientes", *Clarín*, 18 diciembre.

HELFGOT, MARCELO (1999b), "Una provincia desquiciada a la espera del interventor", *Clarín*, 20 Dec.

HOPENHAYN, MARTIN (1993). "Postmodernism and Neoliberalism in Latin America". *Boundary 2*, 20: 3, 93-109

HOPENHAYN, MARTIN, F. CALDERÓN y E. OTTONE (1997) "The Intercultural Fabric: Strength and Dilemma in Latin American Modernity". En: *Organization*, 4: 4, 473-478.

KLIKSBERG, BERNARDO (2000). *La lucha contra la pobreza en América Latina*. BID y Fondo de Cultura Económica.

Latinobarómetro 2002 [<http://www.latinobarometro.org>].

LEAL-BUITRAGO, FRANCISCO *et al.* (1991). *Clientelismo. El sistema político y su expresión regional*. Bogotá: Tercer Mundo Editores.

ROMERO, J.C. (2000). "Indicadores socioeconómicos y factores de la crisis en Corrientes" en: *Análisis de los factores intervinientes en la crisis del estado en la provincia de Corrientes*, Resistencia: Univ. Nacional del Nordeste, CD.

LÓPEZ, ELSA and SEBASTIÁN HALPERIN (1996). *Infancia y condiciones de vida. Encuesta especial para el diagnóstico y la evaluación de las metas sociales*. Aglomerado de Corrientes. Buenos Aires: Subsecretaría de programación macroeconómica, Documento de Trabajo No. 14/96

MARGHERITIS, ANA (1999). *Ajuste y reforma en Argentina, 1989-1995*. Bs Aires: GEL.

MARTZ, JOHN D. (1997). *The Politics of Clientelism. Democracy and the State in Colombia*. New Brunswick: Transaction.

MELLER, PATRICIO (1999). "Pobreza y distribución? del ingreso en Chile (Década de los noventa)", in PETER DRAKE and IVAN JAKSIC (eds.). *El modelo chileno. Democracia y desarrollo en los noventa*. Santiago: LOM.

- MOCKUS, ANTANAS y CORZO, JIMMY (2003). "Dos caras de la convivencia: cumplir acuerdos y normas y no usar ni sufrir violencia". Manuscrito a publicar.
- NINO, CARLOS S. (1992). *Un país al margen de la ley*. Buenos Aires: Emecé.
- O'DONNELL, GUILLERMO (1994). "Delegative Democracy", en: *Journal of Democracy*, 5, 55-69.
- O'DONNELL, GUILLERMO (1998). "Horizontal Accountability in New Democracies", en: *Journal of Democracy*, 9, 3: 112-126.
- PARENTE, JOSENIÓ (2002) "O Ceará e a modernidade", in Josenió Parente e José Maria Arruda, *A era Jereissati. Modernidade e mito*. Fortaleza: Edicoes Demócrito Rocha, 125-144.
- Perfil Econômico Do Estado Do Ceará (2002). Fortaleza: Secretaría do Desenvolvimento Economico [<http://www.sde.ce.gov.br/perfil1.html>]
- PRZEWORSKI, ADAM (1991) *Democracy and the Market. Political and Economic Reforms in Eastern Europe and Latin America*. Cambridge: CUP
- REMMER, KAREN y E. WIBBLES (2000) "The Subnational Politics of Economic Adjustment. Provincial Politics and Fiscal Performance in Argentina". *Comparative Political Studies*, 33:4, 419-451
- RONIGER, LUIS (2001). "Patron-Client Relations," En: Neil Smelser and Paul Baltes, (eds.) *The International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences*. London: Elsevier, vol. 16, 11118-11120.
- RONIGER, LUIS (2002). "Estructurando bienes y servicios públicos en Argentina, Chile y Brasil: prácticas e imágenes contemporáneas", en: *Estudios Interdisciplinarios de América Latina*, 13:1, 89-116.
- RONIGER, LUIS (2004). "Clientelism, Civil Society and Market Economy". De próxima aparición en *Comparative Politics*.
- RONIGER, LUIS y MARIO SZNAJDER (1999) *The Legacy of Human-Rights Violations in the Southern Cone*. Oxford: Oxford University Press.
- SALMAN, TON (2000). "Politico-Cultural Models and Collective Action Strategies: The Pobladores of Chile and Ecuador", in Luis Roniger and Tamar Herzog (eds.). *The Collective and the Public in Latin America*. Brighton: Sussex Academic Press, 192-216.
- SCOTT, MAINWARING y SHUGART, M.S. (1997). *Presidentialism and Democracy in Latin America*. Cambridge: Cambridge University Press.
- SCHWARZ, ROBERTO (1996). *Misplaced Ideas*. London: Verso.
- SES (1998). *Anuario de Estadísticas Universitarias* (Programa Mejoramiento del Sistema de Información Universitaria).

- STALLINGS, BARBARA y PERES, WILSON (2000). *Growth, Employment, and Equity*. Washington: Brookings Institution Press.
- SZÉKELY, MIGUEL (2001). "The 1990s in Latin America: Another Decade of Persistent Inequality, but with Somewhat Lower Poverty". Inter-American Development Bank [www.iadb.org/res/32.htm]
- SZNAJDER, MARIO (1996). "Transition in South America: Models of Limited Democracy." *Democratization*, 3, 360-370
- SZNAJDER, MARIO (2002). "Adaptando el Estado al Mercado, o el Mercado al Estado? Reformas constitucionales en Chile, Brasil y Argentina hacia fines del siglo XX", en: *Estudios Interdisciplinarios de América Latina y el Caribe*, 13: 1, 89-117
- Task Force on Higher Education and Society (2000) *Higher Education in Developing Countries: Peril and Promise*, The International Bank for Reconstruction and Development, The World Bank.
- TAVARES RIBEIRO, LAURA (2001). *Ajuste liberal e desajuste social na América Latina*. Petrópolis: Vozes.
- VIGEVANI, TULIO (1998). *Mercosul. Impactos para trabalhadores e sindicatos*. São Paulo: LTr Editora.
- WHITEHEAD, LAURENCE (1992). "The Alternatives to Liberal Democracy: A Latin American Perspective." *Political Studies*, 40, 146-59.
- WHITEHEAD, LAURENCE (2002). "Latin America as a Mausoleum of Modernities", en: LUIS RONIGER and CARLOS H. WAISMAN, *Globality and Multiple Modernities. Comparative North American and Latin American Perspectives*. Brighton: Sussex Academic Press.